

# **1. PRONUNCIAMIENTO sobre la Ley N° 22.604, de Impuesto sobre los Activos Financieros**

"La Asociación de Derecho Fiscal considera oportuno efectuar las siguientes apreciaciones acerca del impuesto de emergencia creado por la Ley 22.604.

Se participa de la idea de financiar el gasto público con recursos genuinos, tal y como lo expresa el mensaje que acompañó el proyecto de ley. Pero, con tal fin no sólo resulta muy importante ponderar la magnitud, utilidad y eficacia del gasto, sino también tener presente que deben escogerse tributos que, al mismo tiempo que contemplan adecuadamente las finalidades perseguidas con su creación, inclusive la meramente recaudatoria, obedezcan a los actuales conceptos y principios de la imposición.

Entiende esta Asociación que el nuevo impuesto no responde a tales requisitos ni cumple con las finalidades expuestas en el referido mensaje fundamentándolo.

En primer lugar no parece correcta la denominación que se le da en el artículo primero, toda vez que la enumeración del artículo tercero permite concluir que se gravan fundamentalmente los activos de aquellas empresas cuya estructura jurídica permita que dichas participaciones tengan el tratamiento impositivo de títulos valores.

Por otra parte, pocas dudas caben acerca de la real incidencia del tributo ya que es lícito suponer que, en la mayoría de los casos, los fondos con los que se abonará el gravamen habrán de ser provistos por las mismas empresas. Por ello, a nuestro juicio, lo expresado en el mensaje aludido precedentemente en el sentido de haberse excluido del gravamen a las empresas productivas, no resulta congruente con las normas sancionadas, más aún si se tiene en cuenta que se admite expresamente que pesa sobre ellas una presión tributaria suficientemente elevada en la actual coyuntura económica.

La mayor objeción que merece la ley que se analiza en sus aspectos más generales, es la provocada por la retroactividad acordada al impuesto, al hacerlo recaer sobre los activos poseídos al 31 de diciembre de 1981. Justamente, las

distintas teorías de la imposición, coinciden en la necesidad de que las normas tributarias sean claras y reduzcan al mínimo los márgenes de discusión. No resulta aventurado prever que se producirán litigios en estos aspectos que redundarán en el menoscabo, una vez más, de las relaciones fisco-contribuyente y que incrementarán los costos de recaudación del nuevo impuesto si no su derogación en los hechos, por lo menos en forma parcial.

La posibilidad de que el tributo sea objetable en su aplicación desde el punto de vista constitucional, debería haber constituido motivo suficiente para haberse abstenido de volcarlo en normas de derecho positivo. Insiste esta Asociación en que existen muy fundadas razones que permiten concluir que se hará indispensable la intervención del poder jurisdiccional para decidir con respecto al encuadramiento dentro de los cauces constitucionales del poder tributario ejercido de tal manera.

Se pondrá en juego el principio de la legalidad de los tributos, tan celosamente custodiado por los tribunales con sólida base en nuestra Carta Fundamental, así como la caracterización del tipo de tributo en cuanto a si se trata de los denominados de ejercicio y, por ende, si la sola circunstancia de haber concluido tal ejercicio, constituye valla suficiente al poder tributario.

Resulta, además, evidente que no se han tomado en consideración cuestiones de tanta importancia como la estabilidad, no sólo jurídica sino económica, muy vinculada a la retroactividad de la norma. El deterioro de la relación fisco-contribuyente se profundiza aun más si se tiene en cuenta que las disposiciones legales que estamos considerando, implican una suerte de neutralización de exenciones de bienes, vigentes para el impuesto al patrimonio neto individual. Que ni siquiera se han tomado en consideración aspectos técnicos de indudable justicia, como ser el cómputo de la parte proporcional de los pasivos atribuible a los activos ahora gravados, la inexcusable doble imposición que se produce, no solamente en el caso de los activos empresarios, sino en los crediticios, que resultan alcanzados además por el que grava el patrimonio neto individual.

Finalmente cree esta Asociación que el nuevo impuesto no resulta adecuado a las circunstancias económico-financieras por las que atraviesa la Nación".

Bs. As., julio de 1982

Dr. Rubén Asorey  
Secretario

Dr. Jorge R. Beltrán  
Presidente